

Intensa actividad golpista en la creación de un clima favorable a sus objetivos

MIGUFLANGELAGUILAR

La semana, erizada de rumores castrenses, se cierra sin datos que permitan condensarlos en propósitos inmediatos, pero con la confirmación de un clima deliberadamente promovido. Entre los síntomas más evidentes cabe señalar la crecida del radicalismo en las publicaciones *ultras*; los ataques a generales caracterizados por su lealtad; el recrudecimiento de la propaganda golpista en los acuartelamientos; la exculpación, cuando no la exaltación, de los procesados por el 23-F, en torno a los cuales bulle la actividad y las visitas; el encuadramiento de escuadristas civiles llamados a intervenir el día D; la insólita parálisis de las investigaciones sobre la trama civil, y, en definitiva, la ausencia de reacción del Gobierno.

Resulta escalofriante la lectura de las publicaciones *ultras* en lo que va de mes de noviembre y sus circuitos de conexión y multiplicación de impactos con otros columnistas abrigados en órganos no tan abiertamente comprometidos. Basten dos muestras. En *El Alcázar* escribía el 1 de noviembre Ismael Medina del general Sáenz de Santa María, actual inspector del Cuerpo de la Policía Nacional, que es «uno de los más caracterizados represores del 23 de febrero y en colisión democrática con sus compañeros de armas».

En otro diario, un columnista de postín criticaba duramente las palabras de un general, Guillermo Quintana Lacaci, que hablan logrado transmitir a la opinión pública la impresión del acatamiento y fidelidad de las Fuerzas Armadas a la Constitución y al Rey, de cuya actuación el 23-F asumían una gallarda defensa. Por si acaso, se aprovechaba la ocasión para intentar una disección interesada del texto constitucional, tratando de mostrarlo en contradicción con el punto de vista militar sobre la Patria. Otros ataques con fecha reciente han sido dirigidos al teniente general José Luis Aramburu Topete, ascendido en el último Consejo de Ministros el pasado viernes.

Informaciones llegadas a EL PAIS aseguran que, como en anteriores ocasiones, antiguos colaboradores de aquellos Servicios de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED), que tan eficazmente sirvieron la política del almirante Carrero, bajo la dirección del hoy coronel José Ignacio San Martín, proce-

sado y en prisión provisional por su participación en el golpe del 23-F, visitan bajo nueva cobertura las unidades.

Las visitas de estos oficiales, amparadas en la pretensión de evaluar la temperatura y los estados de opinión, constituyen en realidad un catalizador activo del golpismo. Los jefes de las unidades elevan después sus estimaciones termométricas a los mandos de que dependen y así se transmiten hasta la cúpula unas impresiones previamente incubadas.

Deberes incumplidos del Gobierno

Aquellas notas informativas con las que el mando fijaba posiciones en torno a temas como el de la Unión Militar Democrática (UMD) brillan ahora por su ausencia. Nada se explica sobre la levedad de la condena al capitán Juan Milans del Bosch, que llamó cerdo e inútil al Rey; ni de la imposibilidad de que siga en las filas de las Fuerzas Armadas quien tiene esa opinión del mando supremo sin romper la unidad de su espíritu; ni de las irregularidades con que se ha procedido en la concesión de la medalla de Sufrimientos por la Patria al teniente general Jaime Milans del Bosch; ni de tantas otras cosas tergiversadas en la Prensa golpista que inunda los cuarteles. Sigue, en definitiva, pendiente —ni siquiera ha sido planteada— la gran batalla por ganar la opinión interior en el seno de las Fuerzas Armadas, sometidas a la incitación permanente de las publicaciones *ultras*.

Después del 23-F, los deberes esenciales del Gobierno, en aplicación de la grave lección recibida, exigen, según todos los expertos, tres medidas esenciales: inmediata y enérgica reorganización de los servicios de información, sobre la base de la confianza constitucional de sus componentes; desarrollo de una política de destinos cuidadosa, que asegure al menos las posiciones clave de las unidades operativas, y la reforma de la Guardia Civil.

La parálisis gubernamental ha sido, por el contrario, la tónica dominante, salvo para una cuestión, en gran parte excéntrica, a este núcleo vital para nuestra supervivencia como comunidad libre: el ingreso en la OTAN, donde se han concentrado todos los esfuerzos que tanto se echan en falta.

Un subsecretario para tres ministros

Un ilustre soldado, con dilatada experiencia en puestos de estudio y de mando al más alto nivel orgánico, criticaba recientemente en privado la política de contemplaciones y paños calientes, e insistía en que las Fuerzas Armadas sólo entienden el lenguaje del mando, y sólo respetan a quien lo utiliza con autoridad y energía. Citaba un ejemplo de lo contrario aportando pruebas del aumento numérico de coroneles asignados a determinada arma, siendo así —afirmaba— que partíamos ya de una situación inflacionaria de altos mandos, que configuran una macrocefalia patológica.

Otro general de intachable conducta, estricta dedicación y gran calidad moral, a quien se le negaron los medios para llevar a cabo la delicada y decisiva tarea que se le asignó hace ya dos años, analizaba los resultados negativos de la reforma militar, tal como se ha configurado en la práctica real. Antes —aseguraba— había tres ministros militares que respondían con su presencia ante el Gobierno en pleno, y que habrían tenido que comparecer ante la Comisión de Defensa del Congreso y del Senado

para responder a las preguntas y dar cuenta de sus actividades. Ahora —añadía— sigue habiendo realmente tres ministros militares —los jefes de Estado Mayor del Ejército, la Armada y el Aire—; pero, a diferencia de sus antecesores, se ven libres de responder ante el Consejo de Ministros ni ante el Parlamento de esas desagradables tareas, y de resolverles otros asuntos de recursos e intendencia se encarga quien, a todos los efectos, hace el papel de subsecretario de los tres, aunque mantenga la designación nominal de ministro de Defensa.

La candidatura de González del Yerro

Desde una evaluación análoga, pero con pretensiones antagónicas, algún general impaciente, sin tiempo en actividad suficiente para seguir aspirando al puesto de jefe de Estado Mayor del Ejército o presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, intenta ahora ganar su designación nada menos que como ministro de Defensa, en el Gobierno que de forma inminente prepara, desde hace largos meses, Leopoldo Calvo Sotelo.

A este respecto, círculos castrenses señalan el nombre de Jesús González del Yerro, capitán general de Canarias, cuya promoción se vinculaba hace un año (véase EL PAIS de 27 de noviembre de 1980) con el intentado Gobierno de *gestión*, propugnado entonces por sectores financieros, eclesiásticos y militares, con Alfonso Osorio en la presidencia. Este nombramiento parece garantizado que tendría serias consecuencias, de las que ha sido informado *quien corresponde*.

En cuanto a las escuadras civiles en preparación, las primeras noticias se tuvieron alrededor del 23-J, tras la detención del comandante Sáenz de Ynestrillas, cuyo procesamiento militar ha sido recientemente sobreesido. Ahora, ese dispositivo de encuadramiento e instrucción se ha intensificado. Mientras, persiste la oscuridad absoluta en torno a la trama civil del 23-F, pese al tiempo transcurrido.